

SEXTA SESIÓN

PANORAMA ESTRATÉGICO

PANORAMA ESTRATÉGICO

Por JOSÉ SÁNCHEZ MÉNDEZ

Antecedentes

Hasta poco antes de la caída del muro de Berlín y de la desaparición del Pacto de Varsovia, Iberoamérica estaba considerada por Estados Unidos como una zona estratégica propia para mejorar su seguridad y evitar la influencia soviética mediante la cooperación con los países situados al sur del Río Grande. Por ello habían venido potenciando el papel político de los Ejércitos de las naciones iberoamericanas, cuyos oficiales dominaban o influían en los partidos políticos y cuyos líderes, si pretendían gobernar, se veían forzados a pactar con las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, los programas de misiones militares eran un excelente instrumento para establecer relaciones directas con los responsables de los ejércitos, marginando a las autoridades civiles, al mismo tiempo que las armas que facilitaban mejoraban la capacidad para hacer frente a la subversión y a los desórdenes públicos. Pero el fracaso y agotamiento de los regímenes militares, predominantes en la región, incapaces de definir y llevar a cabo unos programas que ofreciesen el bienestar económico-social creó una inestabilidad política que llevaría a gravísimas situaciones que nunca habían sido conocidas en el hemisferio, lo que obligó a Washington a modificar su postura y volver sus ojos hacia la democracia, única alternativa para Iberoamérica. La nueva política de Estados Unidos comenzó por retirar la ayuda militar y económica a aquellas repúblicas en las que

consideraba que no había respeto a los derechos humanos y concederla solamente a los nuevos regímenes civiles establecidos para que pudieran hacer frente a las crisis internas.

Ante esta actitud las naciones suramericanas comenzaron a darse cuenta que la política de seguridad y defensa planificada para ellos por los norteamericanos era inviable por su idiosincrasia, forma de ser y de pensar, pues como decía Octavio Paz, la diferencia entre la comunidad anglosajona y la hispana está que en aquélla priman los méritos del individuo y los valores materiales, mientras que en la iberoamericana son la familia y los valores espirituales, razones que les llevaron a independizarse en su política exterior. La reforma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que reconocía que los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) podían elegir libremente su organización política, económica y social, y la admisión del pluralismo ideológico, definir concepciones estratégicas diferentes de las norteamericanas, poder diversificar el abastecimiento del material y equipo para sus Fuerzas Armadas y establecer industrias nacionales de armamento, eran fiel reflejo del profundo cambio que se estaba produciendo en las naciones de la región.

Al mismo tiempo, surgieron viejos fantasmas de un pasado que se creía superado, los conflictos fronterizos que llegaron a producir más de 30 situaciones conflictivas, pero no evitaron que las principales naciones suramericanas comenzasen a establecer acuerdos subregionales y bilaterales sobre seguridad y defensa, los cuales permitieron una disminución de los efectivos de las Fuerzas Armadas y el nivel de armamentos, a fin de destinar parte de sus gastos militares a programas de inversión y desarrollo para conseguir un mayor crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB), hasta el punto que en la actualidad el conjunto de las naciones iberoamericanas realizan el esfuerzo de defensa más bajo del mundo, aproximadamente un 1,2% del PIB.

El ingreso de España y Portugal en la Comunidad Europea en 1986 produjo un importante salto cualitativo y cuantitativo en las relaciones de la Unión con Iberoamérica, principalmente en dos grandes capítulos, el desarrollo institucional y diálogo político y el de la cooperación. Al mismo tiempo propició un mejor entendimiento y un mayor acercamiento entre las dos naciones ibéricas y las repúblicas del otro lado del Atlántico, unidas por la lengua, cultura, creencias y otros vínculos históricos y valores comunes, lo cual conduciría a la celebración anual de una reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, que se iniciaría en 1991 en la ciudad mexi-

cana de Guadalajara, donde se expresó la intención de aprovechar en toda su plenitud las afinidades que unen a sus miembros para consolidar un espacio abierto a la cooperación y la solidaridad. Además en junio de 1999 se celebrará en Río de Janeiro, a iniciativa española, una Cumbre entre Iberoamérica, el Caribe y la Unión Europea.

Estados Unidos, preocupado por los éxitos que venían obteniéndose en las cuatro Cumbres Iberoamericanas celebradas hasta 1994 y por el incremento de las relaciones entre Iberoamérica y la Unión Europea, decidieron introducir un cambio notable en las relaciones hemisféricas, por lo que propusieron una Cumbre llamada de las Américas, de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebró en Miami en diciembre de dicho año. A esta reunión, le ha sucedido una segunda, que ha tenido lugar en abril del presente año en Santiago de Chile, en la cual ha imperado la voluntad iberoamericana de negociar en bloque con Estados Unidos y no bilateralmente, tal como hasta esa fecha imponía la política norteamericana y ha puesto fin a la certificación unilateral que el Gobierno de Washington venía aplicando a las naciones al sur del Río Grande en el área de la guerra contra el narcotráfico, que ahora será realizada con carácter multinacional por la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de las Drogas.

Pero frente a las presencias española, de la Unión Europea y de Estados Unidos, ha surgido con fuerza un cuarto en discordia, Canadá, que ha definido a Iberoamérica como región de especial interés estratégico y la cual ha prestado al Gobierno de Ottawa el apoyo internacional a varios de sus proyectos, tales como la prohibición de minas antipersonales, la oposición a la Ley norteamericana Helms-Burton y la prórroga de la presencia de la fuerza de paz en Haití. En 1998 el primer ministro canadiense ha efectuado una gira por varios países de la región acompañado por el Team Canadá 98, mezcla de misión diplomática y comercial en el que figuraban 500 hombres de negocio. Las exportaciones canadienses a los países iberoamericanos en los últimos cuatro años han pasado de 260.000 millones de pesetas a 500.000 millones, además de otros 200.000 en contratos negociados.

El escenario estratégico

En conjunto, las naciones iberoamericanas suman alrededor de 18 millones de kilómetros cuadrados y se extienden a lo largo de una zona que va desde la frontera sur de Estados Unidos hasta las aguas que separan el

continente americano de la Antártida, aunque desde el punto de vista de la seguridad y la defensa el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca comprende las superficies marítima y terrestre que llegan hasta el polo sur. Este subcontinente está bañado por los océanos Pacífico y Atlántico que se unen por el Norte a través del canal de Panamá y por su parte más meridional por las aguas de la Tierra de Fuego y el paso de Drake. Posee enormes recursos naturales, muchos de ellos de carácter estratégico, como son el petróleo y diversas materias primas, grandes reservas forestales que la convierten en la principal reserva mundial de la biosfera, excelente riqueza agrícola y aguas pesqueras de indudable valor. Poblada por más de 400 millones de seres humanos que están unidos por vínculos comunes, culturales, religiosos, históricos y dos únicas lenguas, el español y el portugués, más decenas de dialectos de la minoría indígena de unos 40 millones de habitantes. Cara al siglo XXI, Iberoamérica aparece como una de las zonas del mundo con mayores posibilidades de bienestar y desarrollo económico y social, aunque hasta la fecha su deuda externa rebasa los 640.000 millones de dólares.

Pero sobre esta realidad y esperanza de futuro se ciernen una serie de amenazas, riesgos e incertidumbres que pueden además de frustrar esas optimistas previsiones, poner en peligro los logros ya conseguidos. Por otro lado, las políticas individuales de esas naciones así como las subregionales no son percibidas de igual forma por los actores de la región, por Estados Unidos que son la principal potencia del continente, por la Unión Europea, ni incluso por aquellas naciones como España y Portugal que fueron las potencias colonizadoras de Iberoamérica. Ejemplo, «el caso Pinochet» y sus posibles repercusiones. La percepción de esas amenazas y riesgos son muy distintas si son evaluadas por los estrategas del Pentágono, por analistas anglosajones o de otras naciones europeas. Reconocer y comprender las variaciones y situaciones que se pueden producir en cada caso nacional y subregional es fundamental para fortalecer su estabilidad democrática y coadyuvar en el diseño de las políticas más adecuadas para facilitar su desarrollo político y social.

Riesgos y amenazas

Son muchos los que pueden ser identificados, si bien no todos tienen la misma incidencia ni gravedad tanto a nivel individual como colectivo. Podemos enumerar los más importantes, pobreza, narcotráfico, guerrilla,

crimen organizado, corrupción, problemas fronterizos, migraciones ilegales, continuismo y regresión política, confrontación indígena, medio ambiente y redefinición de los cometidos de las Fuerzas Armadas.

Según el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el uruguayo Enrique Iglesias, la incidencia de «la pobreza» y sus elevados niveles son superiores a los existentes en 1980, afectando a la clase campesina, en particular a la población indígena. Sería deseable pues corregir tan injusta situación a través de un mayor crecimiento económico y una adecuada estabilidad política y social, que representa el gran desafío de Iberoamérica para comienzos del siglo próximo, toda vez que la pobreza crea un clima socio-político especialmente tenso al crear una masa de desposeídos dispuestos a unirse a grupos criminales, narcotraficantes o armados de muy distinto signo. Curiosamente Argentina que es la nación con mayor renta *per cápita* va a la cabeza del crecimiento del número de pobres, pues según Naciones Unidas su porcentaje de miseria ha pasado del 7 al 19% en los últimos años. Para 1998 la previsión de crecimiento económico para toda la región, estima la Comisión de Crecimiento para Iberoamérica, estará entre el 2 y el 3%, cuando tales valores deben ser del 7 al 8% si se quiere afianzar un crecimiento sostenido. Pero este crecimiento viene limitado por la gran deuda de la región, razón por la cual la Conferencia Episcopal Iberoamericana ha solicitado su condonación para algunos países y la renegociación para otros.

El derrumbamiento de los precios agrícolas a nivel mundial ocurrido en los últimos años y las reformas neoliberales que eliminaron el apoyo del Estado a la agricultura campesina, llevó a millares de campesinos iberoamericanos al cultivo de marihuana, la amapola y la hoja de coca como única alternativa posible para subsistir, pues para ellos representa una ganancia de 4 a 34 veces la del cacao o maíz. De esta forma, los agricultores quedan a merced de los narcotraficantes, a veces de acuerdo con elementos paramilitares y con la propia policía y que junto a los vínculos entre la guerrilla y «el narcotráfico» vienen a complicar más los intereses en la zona. Es cierto que la producción de drogas de diseño ha producido un cierto descenso de los precios de la hoja de coca, pero así y todo el tráfico de drogas sigue siendo decisivo tanto para la economía doméstica, la rural e incluso para las economías nacionales, en particular para los países de la región andina. Así, por ejemplo, en Colombia el narcotráfico representa el 6 al 8% del PIB.

La lucha contra la droga no es nada fácil si tenemos presente que Estados Unidos con sólo el 5% de la población mundial consume el 50% de toda la droga que se produce en el planeta, y a su vez, el blanqueo de dinero obtenido por los narcos permite a estos grupos mafiosos obtener sistemas de armas más modernos y mejores que los de las fuerzas militares y de seguridad responsables de su represión. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres ha advertido que el incremento del narcotráfico ha condicionado la política militar y de ayuda de Estados Unidos a dichas naciones, pues los programas de asistencia para fortalecer la seguridad anticomunista de los últimos 30 años han sido sustituidos por otros contra el tráfico de drogas, lo que ha producido tensiones entre Washington y sus vecinos, ya que con esta política en muchos casos se ha debilitado a la autoridad civil y a las fuerzas policiales en beneficio de unas Fuerzas Armadas, educadas y adiestradas en la lucha contra el comunismo y la subversión. Además, como dice el analista mexicano José Luis Piñeyro, las presiones norteamericanas no serán para fortalecer nuestra democracia, pues en Washington siempre han preferido la estabilidad a la democracia.

Una de las más graves lacras y de situaciones de riesgo para Iberoamérica lo constituye «la criminalidad organizada», donde esquemas muy bien concebidos para extorsión y secuestros encuentran un terreno abonado, en particular en aquellas regiones con una generación de jóvenes sin empleo, con vinculación con el narcotráfico o como en algunas centroamericanas donde se produjo una desmovilización demasiado rápida, mal planeada y sin proporcionar a los desmovilizados las ayudas económico-sociales apropiadas, así como a la existencia de un mercado negro de armas a precios muy bajos. En la XXXIX Asamblea Anual de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, celebrada en la primavera de 1998, se advirtió que el crimen organizado y la violencia urbana alcanzaban unos niveles muy superiores a la media mundial, lo que repercute negativamente en la vida social y económica de la zona.

En un informe de la citada institución se dice que anualmente hay en la región unos 140.000 homicidios, que cada iberoamericano pierde una media de tres días de trabajo por año a causa de la violencia y que 28 millones de familias sufren cada año un robo o un hurto. El informe señala que los costes económicos suponen la destrucción de bienes equivalente al 14,2% del PIB regional y en capital humano el 1,9% del PIB iberoamericano. Según varios analistas del Banco Interamericano de Desarrollo la violencia criminal reduce entre dos y tres puntos el crecimiento del PIB

cada año y sitúa a El Salvador como la nación del mundo con mayor índice de criminalidad después de Suráfrica, incluso por delante de Colombia y en México, por ejemplo señala que se producen 694 delitos diarios, solamente en la capital federal, donde en el año 1998 se registrará un millón y medio de delitos que dejarán 1.100.000 víctimas.

El fenómeno de «la guerrilla» continúa siendo un grave factor de inestabilidad para algunas naciones iberoamericanas, en particular para Colombia y Perú, aunque la desaparición de la antigua Unión Soviética les haya dejado sin ideología ni modelo social. Además el largo periodo de enfrentamiento con el poder constituido «acostumbró» a los guerrilleros a una vida cómoda respaldada económicamente por el secuestro y la extorsión, lo que en muchos casos hace que se resistan a integrarse en la sociedad tras la disolución del bloque socialista. Igualmente la incapacidad de las fuerzas policiales e incluso de las Fuerzas Armadas para reprimir esta subversión violenta ha dado lugar a la aparición de distintas facciones de paramilitares que ayudan al crecimiento de la espiral de la violencia. La ausencia de la autoridad del Estado ha llevado en muchas ocasiones a que la guerrilla le sustituya en el desempeño de ciertas actividades, especialmente de índole social, lo que incide muy seriamente en la credibilidad y estabilidad de algunas democracias aún demasiado frágiles. Pero también existen conexiones entre guerrilleros, narcotraficantes y mercado de armas, lo que hace muy difícil desentrañar la madeja del fenómeno subversivo que solamente en Colombia ha causado en los últimos 10 años cerca de 40.000 víctimas y en Perú sobre unas 30.000.

Paralelamente la población indígena se ha visto entremezclada entre la acción guerrillera y la represión del Estado puesto que tanto los indios como los subversivos comparten en muchas situaciones el mismo territorio, sobre todo cerca de las fronteras internacionales y además los guerrilleros han pretendido disfrazar su aparente ideología asumiendo ciertas reivindicaciones políticas y sociales indígenas a fin de lograr su apoyo. La valiente decisión del nuevo presidente de Colombia, Andrés Pastrana, no sólo de dialogar con la guerrilla sino de haber retirado a las fuerzas militares en una amplia zona dejando bajo el dominio de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias una extensión de más de 40.000 kilómetros cuadrados para facilitar las conversaciones que permiten llegar a un proceso de paz, abre la esperanza a que se pueda poner término a tantos años de guerra civil.

«La corrupción» es otra de las principales plagas de una gran parte de las sociedades iberoamericanas. El que fue director de la Fundación Arias, «Armas para la Paz y el Progreso Humano», de Costa Rica, Joaquín Tacsan denunciaba hace dos años como el blanqueo de dinero, procedente del narcotráfico, penetraba e influía en los procesos electorales, compraba votos, políticos influyentes e incluso jueces e igualmente permitía a los traficantes de la droga adquirir armas y sistemas de comunicaciones de calidad muy superior a los de los cuerpos armados y policiales. Igualmente los obispos iberoamericanos han denunciado reiteradamente que el problema de la deuda no podrá resolverse hasta que no sea ganada la batalla de la corrupción y han denunciado que muchos préstamos que conceden los organismos financieros internacionales van en ocasiones a engrosar las arcas de los corruptos. Son frecuentes las denuncias de políticos por enriquecimiento y la adjudicación ilícitos de jugosos contratos y como ha expresado el analista mexicano Garduño Valero una de las acciones más importantes para luchar contra el narcotráfico es erradicar la corrupción.

La VII Cumbre Iberoamericana celebrada en el mes de noviembre de 1997 en Isla Margarita, Venezuela, bajo el tema los valores políticos de la democracia contenía en su declaración final un compromiso de lucha contra la corrupción, puesto que puede producir la desestabilización institucional y amenazar por consiguiente al sistema democrático y social, ya que golpea la sociedad, el orden moral y la justicia. Por su parte en el año 1997 la organización no gubernamental, «Transparencia Internacional» reflejaba en su informe anual que siete de las 20 naciones más corruptas del mundo pertenecen a Iberoamérica y citaba como ejemplo que el país anfitrión, Venezuela había perdido desde 1985 por esta causa alrededor de 25 billones de pesetas.

La Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos al mencionar los riesgos y amenazas actuales y de comienzos del siglo XXI para Iberoamérica, cita entre ellos a las migraciones ilegales. Lógicamente para Washington las continuas migraciones mexicanas son causa de notable preocupación y que junto a puertorriqueños, cubanos, haitianos y en menor número de otros países iberoamericanos, ha hecho que los ahora denominados *hispanics* superen ya los 25 millones de habitantes y que en los próximos años constituirán la minoría más numerosa del país. Pero estos movimientos migratorios, normalmente ilegales, se producen también entre las naciones iberoamericanas en mayor o menor cuantía, lo que produce inadaptaciones sociales profundas y son fuente de delincuentes potenciales.

Solamente en la República Dominicana hay medio millón de haitianos en busca de un mínimo medio de subsistencia. Pero el problema se agrava si tenemos en cuenta los millares de desplazados como consecuencia de los conflictos internos civiles o enfrentamientos bilaterales. Cabe citar como muestra que en México hay unos 50.000 refugiados guatemaltecos registrados, que se elevan a 100.000 si se cuentan los ilegales y dentro de Colombia cerca de un millón de ciudadanos se ha visto obligado a cambiar de residencia a causa del enfrentamiento entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas y las de Seguridad del Estado.

Desde el punto de vista individual de cada país iberoamericano el concepto de «Seguridad Nacional» viene a ser coincidente, con carácter general, defensa de la soberanía nacional e integridad territorial, lucha contra la subversión y contra el narcotráfico y protección del orden constitucional. Pero desde la perspectiva de los pueblos indígenas el concepto va unido íntimamente al de supervivencia, ya que ellos se consideran como nacionales, por lo que esta diferencia incide sustancialmente en sus relaciones recíprocas. Además de la seguridad física, los indígenas pretenden proteger su seguridad cultural para preservar a la nación indígena como una entidad política y territorial.

La diversidad étnica y cultural de los 40 millones de indígenas que pueblan Iberoamérica suponen una barrera para su integración en las respectivas sociedades nacionales puesto que prefieren su forma propia de ver el mundo. Ellos no perciben como nosotros los conceptos de propiedad y de frontera y para ellos el aspecto de seguridad fundamental es el derecho a regir las tierras como bienes comunales. La tierra es su garantía de autonomía y gobierno autóctono, su base como organización social, el medio por el que transmiten su cultura e identidad a través de las generaciones. Sin embargo, existen innumerables formas de agresión contra las diferentes comunidades indígenas iberoamericanas, empresas petrolíferas, talas de arbolado, invasiones de cazadores o emigrantes en busca de tierras cultivables y un largo etcétera, y cuando intentan evitarlo suelen llevar la peor parte en la confrontación. Más grave aún es la aparición de los narcotraficantes o de los guerrilleros, ya que, como señalé anteriormente, los indígenas se encuentran en medio de una situación dramática, la de los delincuentes y subversivos frente a las fuerzas del Estado responsable de su situación.

No es de extrañar que a finales de los años setenta haya nacido en Iberoamérica una ideología o sentimiento «indianista» que pretende fortalecer

los valores culturales de la población indígena y que aparece frente al concepto del «indigenismo», concepto artificial creado por el Estado que pretende su integración en la sociedad occidental con una supuesta protección de sus derechos. De igual forma el indianismo se opone al marxismo revolucionario porque considera que no garantiza su identidad cultural, pero a su vez conviene tener presente que existen diversas tendencias y corrientes entre las diferentes familias indígenas, así como la forma en que los cambios sociales habidos en los diferentes pueblos iberoamericanos y las distintas ideologías han influido sobre los indios. La protección de su cultura, idioma, autonomía, identidad y de sus tierras son factores que inciden seriamente sobre la seguridad de la región. Pero también hay otro aspecto muy importante a considerar, el control de los recursos naturales, como son por ejemplo los de la Amazonia, por ser el lugar donde se concentra una gran variedad de pequeños grupos indígenas, formada por unos 200 grupos étnicos que hablan más de 170 dialectos y lenguas. Ese control y explotación no tienen porque oponerse a la comprensión y respeto de unos seres humanos que sólo piden se reconozca sus derechos y a vivir en paz y en libertad en unas tierras que siempre han creído son suyas.

A lo largo de la historia de las repúblicas iberoamericanas los militares han ejercido una notoria influencia sobre la política y la sociedad, si bien con ciertas diferencias nacionales, aunque hayan existido algunas circunstancias de carácter general para toda la región. Es cierto que los ejércitos pudieran ser considerados como la pieza esencial del nacimiento de la nación porque fueron el instrumento armado para alcanzar la independencia, pero su continuada presencia en la vida pública, bien por la quiebra del sistema democrático o falta de respeto de los partidos políticos al régimen parlamentario, ha impedido una relación fluida entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Los militares iberoamericanos han tenido a lo largo del siglo xx un excesivo protagonismo, unas veces apoyando a un determinado sector político, alcanzando el poder de manera institucional o en forma de liderazgo personal, a través del caudillismo.

Esta presencia fue muy notoria hasta finales de los años setenta, pues en 11 repúblicas había dictaduras militares establecidas por golpe de Estado, en cinco las Fuerzas Armadas tutelaban de alguna forma el régimen político existente, en dos la autoridad política era ejercida por el control civil y en uno había un sistema marxista instaurado por una revolución. A comienzos de los años ochenta diversas circunstancias político-sociales internas y externas, los cambios sociales que se estaban produciendo en

todo el mundo y la presión de la Unión Europea y de Estados Unidos fuerzan a los militares a plantearse nuevos cometidos y a aceptar el papel constitucional que deben asumir en un Estado de derecho.

Sin embargo, diversos observadores internacionales, como por ejemplo el *Strategic Survey* del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, han denunciado la postura de algunos militares que pretenden seguir influyendo o alcanzar el poder incluso a través del sistema democrático. Pone como ejemplo la designación del general Hugo Banzer como presidente de Bolivia en 1997 dentro de unas limpias elecciones, el nombramiento del también general Augusto Pinochet como senador vitalicio chileno de acuerdo con las previsiones constitucionales de su país, la presencia en la vida pública paraguaya del general Lino Oviedo o la elección del teniente coronel Hugo Chávez como nuevo presidente de Venezuela.

El citado Instituto británico señala la existencia de otras instituciones militares que buscan incrementar su influencia en la política nacional, tal como las Fuerzas Armadas mexicanas al pretender un mayor protagonismo en la lucha contra el narcotráfico o la guerrilla zapatista e incluye en la lista a Perú donde el presidente Alberto Fujimori busca el respaldo de los militares, en particular desde los éxitos a operación de liberación e los rehenes que habían sido tomados en la Embajada japonesa en Lima. Otros analistas advierten que la estabilidad democrática iberoamericana podrá verse amenazada por algunos oficiales deseosos de llenar vacíos de poder constitucional, por el desencanto político y social o ante la incapacidad del poder civil para erradicar la guerrilla, el narcotráfico y el crimen organizado.

Pero esta posible «regresión política» podría ser incrementada por el «continuismo», concentración de poder personal, así como por la institución de las Fuerzas Armadas al controlar o reducir los aspirantes al sillón presidencial. Varios Gobiernos iberoamericanos vienen introduciendo o pretenden introducir formas constitucionales para asegurar la reelección, lo cual representa una desviación de las normas y prácticas de la democracia que había sido establecida para garantizar que no volvería a instaurarse en el país una dictadura militar, por lo que el «continuismo» abriría el camino a la militarización de la política de la mano del nuevo autoritarismo electoral.

«Los contenciosos fronterizos» fueron responsables de los enfrentamientos no sólo diplomáticos sino incluso armados habidos en la región en los

últimos años e igualmente constituyeron un factor esencial en la carrera armamentística finalizada muy recientemente. Toda vez que una de las comunicaciones de este seminario se refiere a estas disputas fronterizas, no me extenderé sobre el tema sino recordar, tal como señala el experto en temas iberoamericanos, Patrice Colby, que antes del advenimiento de la democracia había entre Argentina y Chile, 28 disputas fronterizas distintas y que en el momento actual solamente queda una sobre una pequeña franja de 13 kilómetros. Igualmente es bueno también recordar que el 26 de octubre y con asistencia de los Reyes de España se firmó en Río de Janeiro un acuerdo de paz denominado Acta de Brasilia, entre los presidentes de Ecuador y Perú, en virtud del cual se ponía fin a un largo conflicto que venía durando 170 años y que ha exigido 56 años de negociaciones y tres enfrentamientos armados.

Otro factor importante a considerar es el cometido que las Fuerzas Armadas deben desempeñar como institución en un régimen democrático. Antes se ha advertido de una posible regresión política basada en el continuismo y en el papel que algunos militares, a título personal, pretendían jugar en la vida política y social de algunas repúblicas iberoamericanas, ahora que lo que pretendemos, aunque sea muy brevemente, es valorar el *rol* que los Ejércitos deben asumir ante la nueva situación creada y su subordinación al poder civil legalmente constituido.

En opinión de diversos expertos y analistas internacionales, aunque el control político de las Fuerzas Armadas se ha ido consolidando, sin embargo, en algunas de estas naciones continúan todavía organizadas y equipadas para afrontar unas amenazas externas cada vez más remotas y critican que parte de los gastos militares tienen mucho que ver con el prestigio y *modus vivendi* de sus componentes, que no renuncian a perder ciertos privilegios del pasado. La indefinición de la misión de las Fuerzas Armadas representa todavía un riesgo nada desdeñable y que esté llevando a que en algunas naciones iberoamericanas participen o pretendan participar en cometidos más propios de las fuerzas policiales, como son la lucha contra el narcotráfico, seguridad interna, control de fronteras o protección del medio ambiente, cometidos que exigen un alto grado de entrenamiento, una particular especialización y equipos, material y medios apropiados más que costosos sistemas de armas concebibles sólo para un conflicto armado.

Esta actitud hace que en ciertos casos la entidad de las Fuerzas Armadas pudiera estar sobredimensionada. Pero este análisis procedente del

entorno anglosajón parece en cierta medida incorrecto, pues de acuerdo con los datos facilitados por el Fondo Monetario Internacional los gastos que las naciones iberoamericanas dedican a la defensa han venido disminuyendo de forma notoria y progresiva desde comienzos de la década de los años noventa y como se comentó en los «Antecedentes», p. 129, de esta comunicación, hoy día están por debajo del 1,2% del PIB. Por otra parte aunque la decisión norteamericana del verano del 1997 de levantar el embargo, de venta de armas a Iberoamérica, que había sido decretado hacía 20 años por el entonces presidente Carter, se vio con cierto temor y recelo de que fuese un pistoletazo de salida para una carrera de armamentos, la realidad es que ésta no se ha producido. Solamente cinco naciones han incrementado sus presupuestos de Defensa con relación a 1985, Brasil, Colombia, Chile, México y Venezuela. Los dos primeros se destacan porque ese aumento es ciertamente notable, en el caso brasileño la necesidad de proteger la Amazonia y en lo que a Colombia se refiere la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. Las otras tres naciones han experimentado un ligero incremento, que en el caso mexicano se refiere a la aparición de grupos guerrilleros, como por ejemplo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así y todo las repúblicas iberoamericanas se están limitando solamente a modernizar sistemas de armas que estaban siendo afectados por un notable envejecimiento, excepto en el caso de Ecuador y Perú que decidieron adquirir algunos aviones de combate a Israel y Bielorrusia con motivo del último enfrentamiento armado que se inició en 1995. En el caso de Argentina, Cuba y casi todos los países centroamericanos la reducción ha sido realmente dramática.

Finalmente queda «la amenaza al medio ambiente», problema realmente muy grave, pues la contaminación atmosférica, la polución de las aguas fluviales y costeras y la deforestación alcanzan niveles muy peligrosos. Baste citar el caso de la Amazonia, reserva principal de la biosfera, que en los últimos 20 años ha perdido solamente por incendios una superficie arbolada similar a la extensión de Gran Bretaña, a lo que había que añadir los millones de hectáreas destruidos por una tala mal planeada y peor realizada. Si a esta negativa actitud del ser humano sumamos los daños devastadores que causa la naturaleza en la región, terremotos, sequía o inundaciones achacables al conocido fenómeno *El Niño*, huracanes tropicales o erupciones volcánicas, el panorama no puede ser nada alentador.

Pero no podemos dejar mencionar el caso de Cuba, no porque pueda representar una amenaza militar a la región, sino porque es un elemento perturbador en las relaciones interamericanas por causa de la actitud de

Estados Unidos. Como es conocido, a finales de marzo del presente año, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Willian Cohen, presentó un informe al Congreso de su país en el que se manifestaba que Cuba había dejado de ser una amenaza para Norteamérica y señalaba que el mayor peligro que podría venir de la Isla sería una masiva llegada de emigrantes, como ocurrió con los balseiros en 1994. Sin embargo, el bloqueo impuesto por el presidente Clinton por medio de la Ley Helms-Burton persiste, a pesar de la pública condena del Vaticano y del rechazo de la Unión Europea y de las Cumbres Iberoamericanas. En el año 1996 el académico norteamericano Wayne S. Smith señalaba que la ligera apertura económica introducida por Fidel Castro era un camino sin retorno y que al no poder dar marcha atrás tendría unos efectos positivos pues desembarcaría antes o después en un cambio social que daría paso a una reforma política. Smith recordaba a los políticos de Washington la similitud existente con el comienzo de la transición española y advirtió que Estados Unidos obtuvo mayores beneficios con España por la vía del diálogo que por la de la presión política. La oposición de Washington a que Cuba se incorpore a la OEA no es compartida por las naciones iberoamericanas, que en la última Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile han manifestado que invitarán al Gobierno de La Habana para que asista a la próxima reunión que se celebrará en Ottawa en el año 2002. Como manifestó en Chile el presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, un país esté ausente y no veo razón para que no se integre en la comunidad democrática interamericana.